

El voto programático en la reelección y la revocación de mandato: una nueva democracia participativa desde lo local

Ignacio Hurtado Gómez*

SUMARIO: 1. Introducción. 2. La reincorporación de la reelección en México. 3. La incorporación de la revocación de mandato en México. 4. El voto programático. 5. Puntos de encuentro. 6. Bibliografía.

1. INTRODUCCIÓN

La incorporación a nuestro sistema electoral de la reelección con motivo de la reforma constitucional de 2014, y el espacio que cada día viene ganando la revocación de mandato con motivo de su reconocimiento constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucional 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, invariablemente nos ha puesto en una ruta de mayor empoderamiento ciudadano, y del fortalecimiento de nuestra democracia directa, frente al debilitamiento de la representativa.

Ello es así, pues aún y cuando la reelección es de naturaleza electoral, y la revocación de mandato es un ejercicio de democracia directa, en su naturaleza existen puntos en común tales como, el hecho de que ambas encuentran en su quintaesencia la voluntad ciudadana, en las dos el tema de la transparencia y rendición de cuentas es fundamental para su correcta operatividad, en ambas los conceptos de seguimiento y evaluación son primordiales, y en las dos, las y los ciudadanos deciden sobre el destino de sus servidores públicos. En una si se renueva la confianza y se le reelige por un periodo más de gobierno, y en el otro, si se le revoca o no el mandato anticipadamente a que termine el periodo de su gestión. Una en sentido positivo, otra en negativo, pero en ambas, la y el ciudadano es quien determina el destino de sus representantes populares.

* Maestro en Derecho, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Correo: ihurtadomx@hotmail.com

Y es en ese sentido de similitudes y cercanías, en donde desde mi perspectiva adquiere un papel fundamental el tema de la evaluación, como ese elemento que permitirá a las y los ciudadanos contar con bases objetivas para tomar la decisión de reelegir o revocar.

No puede ser de otra forma. Para que se decida la reelección o no de un servidor público de elección popular, debe necesariamente, o al menos eso es lo deseable, mediar una evaluación del desempeño realizado, y a partir de ello votarlo –y que continúe en el cargo– o botarlo –y que venga otro en su representación–. Y lo mismo acontece con la revocación, puesto que, para revocar anticipadamente el mandato a alguien, antes de que venza su periodo de gobierno, igualmente debe mediar, o al menos eso es lo deseable, una evaluación para determinar si está cumpliendo o no, y a partir de ello tomar la decisión que corresponda. El tema no es menor si se considera seriamente que, decisiones como estas no pueden tomarse por percepción, creencia, o incluso presión, sino todo lo contrario, deben ser libres, pero sobre todo informadas.

Pues bien, es en este contexto en el que considero que toma una real importancia la figura del voto programático. No para trasladarlo tal cual a nuestro sistema, sino para verlo en un sentido más instrumental, como un mecanismo que puede precisamente posibilitar esos dos aspectos; primero el brindar información sobre lo que se ofreció en campaña y sobre lo que se está haciendo ya en el desempeño del cargo, y segundo, que se pueda constituir en una herramienta de evaluación al alcance de los ciudadanos para medir el quehacer de sus servidores públicos.

Por eso, a lo largo de las siguientes líneas de manera necesariamente general se abordará la incorporación tanto de la reelección como de la revocación de mandato en nuestro sistema electoral, así como la naturaleza del voto programático, para finalmente abrir la reflexión y la deliberación en torno a si dicha figura puede ser tomada prestada, con sus correspondientes ajustes, para fortalecer la toma de decisiones ciudadanas.

En todo caso lo que me interesa dejar como inquietud central, es sobre la necesidad de contar con elementos objetivos que permitan a las y los ciudadanos tomar decisiones razonadas respecto de sus servidores públicos, ya sea reeligiéndolos, ya sea revocándolos.

2. La reincorporación de la reelección en México

Como se sabe, en el *Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral*, del Senado de la República, del 2 de diciembre de 2013, (SENADO) se estableció como un acuerdo de los actores políticos la permisión de la reelección legislativa inmediata, así como en los ayuntamientos; esto es, el “[p]recepto político que permite a un ciudadano que ha sido elegido para una función pública sujeta a un periodo de tiempo..., el derecho de volver a postularse y ser nuevamente electo... para la misma posición”. (Diccionario Electoral, 2003: 1051).

En lo que aquí interesa, en las consideraciones del dictamen se estableció en relación con la elección consecutiva legislativa que traía aparejada ciertas ventajas, a saber:

- a. Tener un vínculo más estrecho con los electores quienes ratificaran mediante el voto a los servidores públicos en su encargo;
- b. Abonar de manera importante a la rendición de cuentas;
- c. Fomentar la confianza entre representantes y representados;
- d. Buscar la profesionalización de la carrera de los legisladores para contar con representantes mayormente calificados a fin de propiciar un mejor quehacer legislativo, lo que puede propiciar un mejor entorno para la construcción de acuerdos; y
- e. Fortalecer el trabajo legislativo y permitir dar continuidad y consistencia a las funciones inherentes de las Cámaras respectivas.

Y si bien en el referido dictamen no se estableció expresamente, se entiende que las mismas razones también son, –*mutatis mutandis*– aplicables para dar sustento a la elección consecutiva en los ayuntamientos.

Adicionalmente, el dictamen del Senado señaló las características de la elección consecutiva, y así, sobre esas premisas, se aprobó la reforma de los artículos 59, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se publicó el decreto respectivo.

Las normas que se desprenden de los enunciados constitucionales, sustancialmente son las siguientes:

a. Que los legisladores federales y locales, así como los integrantes de los ayuntamientos podrán volverse a elegir consecutivamente.

b. Que esa posibilidad será hasta por dos periodos tratándose de los senadores, hasta por cuatro periodos en el caso de los diputados federales y locales, y por un periodo adicional en el caso de los ayuntamientos.

c. Que en aquellos casos en donde el periodo del mandato de los ayuntamientos sea superior a tres años no habrá reelección.

d. Que la postulación sólo podrá realizarla el mismo partido o por cualquier partido que haya formado la coalición que en su caso hubiese hecho la postulación primigenia.

e. Que la anterior exigencia –o restricción– tiene su salvedad en el hecho de que previamente a llegar a la mitad del mandato, quien pretenda reelegirse renuncie o pierda su militancia.

f. Que la reforma al artículo 59 constitucional será aplicable a los diputados y senadores a partir del proceso electoral de 2018.

g. Que la reforma al 116 constitucional en materia de reelección de diputados locales no será aplicable a los legisladores que hayan protestado el cargo en la legislatura que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del decreto.

h. Que la reforma al artículo 115 de la Constitución en materia de reelección de integrantes de Ayuntamientos, no será aplicable a los integrantes que hayan protestado el cargo en el Ayuntamiento que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del decreto.

Así, la esencia es rendición de cuentas y cercanía con el ciudadano, tan es así que, por ejemplo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir el 23 de julio de 2014 la opinión SUP-OP-5/2014 destacó que: *“...la reelección genera un incentivo en el legislador que lo llevaría a ser más receptivo a la responsabilidad pública, a la rendición de cuentas, a volver a su Distrito a explicar su conducta y, finalmente, a capitalizar políticamente su acción legislativa y, en su caso, a ser reelecto.”*

Mientras que por su parte, la Sala Regional Especializada en el expediente SRE-PSC-5/2014 dictó sentencia el 29 de diciembre de 2014, y en lo que interesa se estableció que en el marco de los informes de labores de los servidores públicos, así como del derecho a la información y la rendición de cuentas, así como atendiendo a lo dicho por el legislador, se

trataba de ejercicios necesarios para llevar a cabo el monitoreo ciudadano, lo cual encontraba plena funcionalidad en un sistema reeleccionista. Lo anterior porque permitía que los ciudadanos pudieran ejercer el control respecto del gobernante de manera directa a partir de la evaluación que se hiciera de su gestión. Para ello, en la sentencia se hace referencia al dictamen del Senado en donde se destacan las ventajas de la reelección por lo que a partir de ello se justificó en esa parte a los informes de labores como mecanismos que encuentran espacio en un sistema que permite la elección consecutiva.

Así, con independencia de que a la fecha se han emitido más sentencias en torno a la reelección, particularmente a partir de su puesta en práctica durante las elecciones de 2015 y 2018, lo que interesa destacar son los argumentos que refieren: rendición de cuentas, explicar su conducta, control ciudadano, y por supuesto aunque no se mencionan, evaluación y seguimiento.

Por eso, con independencia de su configuración legal en el ámbito local, y de su funcionalidad, en otros espacios hemos apuntado que el acceso a la información y la rendición de cuentas constituyen aspectos importantes para la reelección, pero igual o más, son el contar con mecanismos de evaluación de la gestión que permitan generar datos objetivos que permitan al ciudadano, de manera libre, informada y razonada, castigar o premiar con su voto a sus servidores públicos.

3. La incorporación de la revocación de mandato en México

Como seguramente estamos enterados, la revocación de mandato es una figura que ha venido ganando terreno en nuestro país, particularmente en el ámbito de las entidades federativas, pues aún y cuando apenas el 14 de marzo se aprobó a nivel federal en la Cámara de Diputados, la reforma constitucional en ese sentido, a nivel estatal se encuentra contemplada en Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas.

Sabemos que no siempre fue así. Cuando en 2009 en el Estado de Chihuahua se configuró la revocación de mandato, el asunto llegó a la Corte, la cual señaló que al no haber en la Constitución Federal algún elemento que permitiera incorporar la revocación de mandato, entonces su adopción era inconstitucional. Razonando lo mismo cuando se hizo lo mismo en el Estado de Yucatán.

Sin embargo, la historia cambio cuando en la Constitución de la Ciudad de México en 2017, igualmente se incorporó la figura, lo que llevó a que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación cambiara de criterio al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017. Para ello argumentó lo siguiente.

En primer lugar, que se trataba de una figura dentro de lo que se conoce como libertad configurativa del legislador, esto es, la libertad de los Congresos para legislar o configurar lo concerniente a su régimen interior, dentro de lo cual estaba esa revocación de mando.

Asimismo señaló la Corte que con dicha revocación se permitía a los ciudadanos involucrarse más en la toma de decisiones y en la exigencia de rendición de cuentas, lo que se traducía en un proceso de empoderamiento ciudadano, ya que consistía en someter el desempeño de los servidores públicos de elección popular a un proceso anticipado de evaluación frente a la ciudadanía, para determinar si continuaba con la confianza del electorado para ostentar el cargo y, en su caso, de no ser así, se revocara ese mandato conferido.

Lo anterior, siguió señalando la Suprema Corte, permitía que con ese mecanismo los gobernantes participen de forma activa en la evaluación de los servidores públicos que ocupan un cargo de elección popular, partiendo de la premisa de que son aquellos los principales afectados o beneficiados de su gestión.

Si bien reconoció que había precedentes declarando la inconstitucionalidad de la figura, –Chihuahua y Yucatán–, había otros estados donde se encontraba vigente, sin haberse impugnado su incorporación.

Y particularmente destacó que la revocación de mandato iba de la mano con el tema de la reelección, por lo que al haberse incorporado ésta última, era válido permitir ahora la revocación.

Todo lo anterior, producto de una nueva reflexión, se dijo.

De esta forma, se puede ir definiendo que la revocación de mandato es un ejercicio legítimo, democrático y constitucional de participación ciudadana directa, que involucra principios fundamentales de hoy en día, tales como la evaluación ciudadana, exigencia, transparencia y rendición de cuentas, por lo que, no implica retiros arbitrarios del cargo público, sino que son ejercicios democráticos y de soberanía del pueblo.

En consecuencia, la revocación de mandato tiene que ver también con el tema de rendición de cuentas, es decir ¿cómo estás ejerciendo el poder?, tiene que ver precisamente con la cercanía hacia el ciudadano, pues para poder rendir cuentas tienen que estar cerca ciudadano y representante, y también tiene que ver con un concepto fundamental que se llama evaluación, por lo que surge la respuesta obligada: ¿cómo estamos evaluando nosotros a los servidores públicos?

Y en ese sentido, se tienen que generar incentivos objetivos que nos permitan precisamente evaluar cómo está funcionando nuestro gobernador, nuestro presidente municipal, el presidente de la República, nuestros legisladores.

Ya en el plano configurativo, y con base en la experiencia de entidades del país como Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Zacatecas, algunos aspectos que se deben contemplar para la configuración de la revocación de mandato, son los siguientes:

1. Hay que definir cuál es la instancia facultada para llevarla a cabo, en este caso todo indica que deben ser los OPLES, lo cual no es menor, sobre todo para quienes están impulsando la desaparición de los institutos locales, pues de llevarse por delante a los institutos locales, es también llevarse a la democracia local, y ahí hay todo un debate interesante.

2. Los cargos para quienes va a aplicar. Esta revocación de mandato puede aplicar para gobernador, diputados de mayoría relativa y de representación proporcional e incluso para presidentes municipales y en algunos casos para síndicos y regidores también, sin embargo, precisó que si bien en algunos casos la elección es por planilla, la revocación no siempre es por planilla, pues puede pedirse únicamente respecto de un regidor.

3. Hay que definir qué porcentaje va a solicitar la revocación, y sí ese porcentaje se basa en listado nominal o es en base al padrón electoral, o cómo dice la propuesta de iniciativa conforme a los votos válidos de cada candidato. Debe haber una exigencia porque de lo contrario se puede convertir en un instrumento político de desestabilización.

4. En algunos casos se prevén causas para solicitarla, ¿cuáles pueden ser esas causas? Por ejemplo, violaciones graves a la constitución, delitos de lesa humanidad, violación de Derechos Humanos, incumplir compromisos de campaña, incumplir ejecución de

programas, encubrir subordinados, manifiesta incapacidad administrativa, hacer uso ilegítimo de decisiones, pérdida de confianza.

5. Tiempo. Debe haber un tiempo para pedirla, la cual no puede ser inmediatamente al inicio del ejercicio del cargo.

6. Debe darse un tiempo a la autoridad que va a desarrollar la consulta, para que pueda revisar los datos, revisar las firmas, pues puede ser que se recaban firmas o nombres falsos.

7. Se tiene que analizar la procedencia.

8. Debe haber un plazo para resolver el tema.

9. Debe haber un plazo para la propia votación.

10. Debe haber un mínimo de votación para que sea vinculante la decisión, pues de no ponerse reglas puede ser que un ciudadano que haya ganado por ejemplo con 50,000 votos, termine revocándose su cargo con 500 votos, ya que de ser 1000 ciudadanos quienes acudan a pedir la revocación de mandato, y que sea esa misma cantidad de ciudadanos quienes acudan a votar, con la mitad de ellos, pudiera revocarse el mandato, por lo que enfatizó se tienen que establecer porcentajes que sirvan de candado, precisamente para evitar que esta figura ciudadana de participación termine siendo un instrumento político de desestabilización y de ingobernabilidad sobre todo pensándose en los ayuntamientos, que al final de cuentas son la primera instancia.

11. Finalmente alguien tendrá que declarar la validez de la consulta y la propia revocación de mandato.

A partir de lo anterior, y para un mayor entendimiento de la revocación de mandato, permítaseme decir, lo que no debe entenderse por revocación de mandato.

No se le debe vincular con la materia electoral. Es un ejercicio ciudadano en términos de democracia participativa, ya que no se va a una elección, sino que se hace una evaluación al servidor público, para en su momento renovarle o no la confianza. Y en ese orden de ideas señaló que como no es materia electoral entonces tampoco se va a tratar de hacer nuevas campañas, por eso la importancia de plazos cortos que deben existir entre la petición y la realización de la consulta.

Tampoco se trata de una remoción arbitraria, como no es una sanción o penalización, pues para sancionar al servidor público existen algunos otros instrumentos como los juicios

políticos, para que en el momento que determinado servidor viole la ley se implemente este tipo de mecanismos y se remueva del cargo.

No puede volverse en un instrumento de venganza política, no se trata de ello, y por eso la importancia de establecerse ciertos mecanismos que la protejan, pues de lo contrario se abriría una puerta a conductas indeseables.

Tampoco puede permitirse que se vuelva una estrategia de los suplentes para quitar al propietario y quedarse en su lugar, por lo que deben cuidarse los términos y los requisitos para evitar este tipo de cosas.

No se debe permitir que se vuelvan actos anticipados de campaña, ni de propaganda electoral, esto es, qué bajo la cobija de la revocación de mandato alguien aproveche para sacar ventaja, por lo que debe cuidarse que los tiempos de la revocación no coincidan con los de campaña.

Así pues, la lógica de la revocación de mandato, es la de una evaluación a un servidor público de manera anticipada a la conclusión de su cargo, a efecto de analizar si está cumpliendo bien su trabajo o de lo contrario se le revoca el mandato.

Por lo que se trata, como ya se dijo, de una figura anclada a conceptos fundamentales hoy en día en nuestra democracia, tales como: transparencia, rendición de cuentas, evaluación de los servidores públicos y esa búsqueda de cercanía entre gobernantes y gobernados.

4. El voto programático

En esencia, el voto programático, constituye un mecanismo de democracia participativa que existe en algunos países, a través del cual los ciudadanos imponen como mandato al servidor electo el cumplimiento del programa de gobierno que presento en su respectiva campaña, por tanto, las y los ciudadanos deben conocer precisamente esos programas y a partir de ello tomar su decisión.

Como se verá, está conectado a la revocación de mandato.

Entre varias de sus ventajas, es que de entrada propicia la estructuración de campañas más realistas y menos estrategia electoral, pues serán las promesas las que después serán el parámetro para determinar, en algunos casos, si se revoca o no el mandato.

Al respecto, bien lo dice (Cerón, 2018) cuando señala que uno de los puntos centrales es que la oferta política debe estar sujeta al escrutinio público, pues “no se pueden plantear planes y programas como galaxias o astros en el universo”.

El país sudamericano que ha impulsado con mayor fuerza la figura del voto programático es Colombia, quien en 1991, su constituyente lo incorporó en su Constitución en el artículo 259. Al respecto, el constituyente colombiano al argumentar sobre la figura señalaba:

“El voto programático sería una alternativa nueva para ser ejercida si el ciudadano lo tiene a bien, una definición inobjetable del mandato del elegido y una base clara para su revocatoria.— Comportaría, adicionalmente, la incorporación de un nuevo factor de independencia para el elector y daría lugar a la vigencia de otro escenario de participación ya que el ciudadano estaría en capacidad de manifestarte sobre puntos específicos de una propuesta que estime de interés para el desarrollo de su propia localidad.— Obligaría, así mismo, a diseñar campañas asentadas en la realidad más que en el estímulo a las necesidades de conglomerados humanos que a pesar de la insatisfacción de sus expectativas, continúan ejerciendo su derecho alimentados por la esperanza, y darían origen a que los propósitos del aspirante encuentren su base en la viabilidad y no en la liturgia.— La independencia del elector, el compromiso del elegido, el estímulo a la participación, la revocatoria del mandato y la madurez del proceso electoral, son los criterios orientadores de esta propuesta.

En consecuencia, se incorporó dicha figura en el artículo 259, para quedar como sigue:

“ARTÍCULO 259. *Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto programático”.*

Por su parte, no deja de ser interesante, que en su momento la Corte Constitucional Colombiana, al resolver la sentencia C-011 de 1994, con motivo de la impugnación de la ley que reglamentaba el voto programático, razonó:

“Esta revocatoria del mandato es la consecuencia lógica del derecho de participación del ciudadano en el ejercicio del poder, como lo dispone el artículo 40 superior. En otras palabras, en el nuevo esquema filosófico de la Carta el ciudadano ya no se limita a votar para la escogencia del gobernante y luego desaparece durante todo el período que media entre dos elecciones –como en la democracia representativa–, sino que durante todo el tiempo el ciudadano conserva sus derechos políticos para controlar al elegido –propio de la democracia participativa–. El ciudadano no se desentiende de su elección”.

Por tanto,

"El voto programático es una expresión de la soberanía popular y la democracia participativa que estrecha la relación entre los elegidos (alcaldes y gobernadores) y los ciudadanos electores. Al consagrar que el lector impone al elegido por mandato un programa, el voto programático posibilita un control más efectivo de los primeros sobre estos últimos. La posibilidad de la revocatoria del mandato es entonces la consecuencia de esa nueva relación consagrada por la Constitución de 1991"

De esta suerte, en la Ley 131, en lo que aquí interesa, se establece:

“ARTÍCULO 1°. En desarrollo del artículo 259 de la Constitución Política, se entiende por Voto Programático el mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que votan para elegir gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa de gobierno que haya presentado como parte integral de la inscripción de su candidatura.

ARTÍCULO 3°. Los candidatos a ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes deberán someter a consideración ciudadana un programa de gobierno, que hará parte integral de la inscripción ante las autoridades electorales respectivas, debiéndose surtir posteriormente su publicación en el órgano oficial de la entidad territorial respectiva o, en su defecto, las administraciones departamentales o municipales

ordenarán editar una publicación donde se den a conocer los programas de todos los aspirantes, sin perjuicio de su divulgación pública de acuerdo con la reglamentación en materia de uso de medios de comunicación.”

Lo anterior implica que los candidatos, al registrar sus candidaturas, igualmente deben presentar su programa de gobierno, la cual se vuelve obligatoria para el candidato en caso de resultar triunfador de la elección, al tiempo que permite al ciudadano contrastar los diversos programas y en su momento votar por el de su preferencia.

Ciertamente, un estudio con mayor profundidad debería mostrar las ventajas y desventajas del voto programático, así como los efectos que produce, sin embargo, no puede soslayarse que en un contexto cultural en donde lamentablemente priman las relaciones clientelares, el voto programático puede resultar interesante, al tiempo que complicado por la falta de cercanía y confianza entre los ciudadanos y sus servidores públicos.

Como dijimos, el voto programático se encuentra anclado a la revocatoria de mandato, de tal suerte que si el gobernante no cumple con el programa de gobierno que presentó al electorado al momento de ser electo, puede abrir la puerta para iniciar un proceso revocatorio.

Así, el hecho de que las y los ciudadanos sepan que tienen derecho a evaluar a su servidor si está cumpliendo o no con lo prometido, y de que no ser así lo pueden hacer a un lado antes de tiempo, es lo que permite inscribir esta figura en la llamada democracia participativa.

Ciertamente como lo decíamos, también existen voces en contra del modelo, argumentando que no es adecuado condicionar a los servidores públicos desde un inicio, o que es muy complicado revisar el cumplimiento de un programa de gobierno.

Más aún, la experiencia ha demostrado que el voto programático en su implementación no ha generado del todo los aspectos positivos que se buscaban, por ello, adicionalmente se sugiere que para fortalecer la figura del voto programático es necesario establecer mayores mecanismos de control, tales como: sanciones para los servidores que fueron revocados, así como a los partidos políticos, mejorar los mecanismos de publicitación de los programas de gobierno, entre otros.

No obstante, no deja de ser una figura de democracia participativa interesante a la luz de la reelección y la revocación de mandato que hemos incorporado en nuestro sistema democrático.

5. Puntos de encuentro

Con lo que se ha visto hasta aquí, no es difícil llegar a un punto de encuentro entre las tres figuras. Sin desconocer que el tema del voto programático está anclado, en la experiencia internacional a la revocación de mandato, por lo que en todo caso el punto de encuentro tiene que darse con la reelección.

Realmente la propuesta central, no es necesariamente que el voto programático llegue tal cual a nuestro sistema, sino la de ver en dicha figura una herramienta que nos permita fortalecer a la reelección y a la revocación en nuestro país, es decir, darle un sentido más instrumental.

Como se ha dicho, tanto una como la otra, entre otros aspectos contemplan en su esencia la evaluación ciudadana respecto de la gestión o el gobierno de sus servidores públicos. En un caso para renovar la confianza respecto de este, y a partir de ello volverlo a elegir, y en el otro, para no proceder a revocarle anticipadamente el mandato.

Bajo esa lógica, mi insistencia es en la imperiosa necesidad de contar con mecanismos de evaluación objetivo que permitan que el ciudadano cuente con la información necesaria, suficiente y objetiva para tomar su propia decisión. No se trata de otra cosa.

No buscar esos mecanismos, es sentenciar a estas figuras a que terminen ancladas a las meras percepciones de la ciudadanía, con todo y su aspecto mediático, así como al manejo clientelar y político de ésta, en detrimento de estas figuras de democracia participativa.

Por eso la necesidad de contar con tales herramientas. Y es en este contexto en donde entra en juego la idea del voto programático, que por lo demás puede vincularse, desde la experiencia mexicana, con el tema de nuestras siempre olvidadas plataformas electorales.

Así, a partir de las plataformas electorales, se puede llevar este seguimiento y control de lo ofrecido en las campañas.

Las ventajas adicionales es que se podría elevar el nivel de las campañas, dejando de ofrecer cuestiones irrealizables, con propuestas más realistas, y al mismo tiempo se generaría in contexto en el cual el ciudadano atendería más a las ofertas que a la imagen de los candidatos.

Sin duda se trata de temas interesantes que requieren de un análisis. Insisto. No se trata de trasladar tal cual al voto programático, sino de tropicalizarlo a la mexicana, y a partir de su esencia, buscar la manera de encontrar alguna herramienta similar que nos permita fortalecer nuestro sistema reelectivo y a la revocación de mandato.

En todo caso lo que me interesa dejar como inquietud central, es la necesidad de contar con elementos objetivos que permitan a las y los ciudadanos tomar decisiones razonadas respecto de sus servidores públicos, ya sea reeligiéndolos, ya sea revocándolos. Al tiempo.

6. Bibliografía

Acción de Inconstitucionalidad 32/2014 y su acumulada 33/2014. Promoventes: Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Disponible en <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=168497> (consultada el 28 de abril de 2016).

____ 88/2015 y sus acumuladas 93/2015 y 95/2015. Promoventes: Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y MORENA. Disponible en <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=187146> (consultada el 28 de abril de 2016).

____ 126/2015 y su acumulada 127/2015. Promoventes: MORENA y Partido Acción Nacional. Disponible en <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=191506> (consultada el 28 de abril de 2016).

Acuerdo de Sala SER-PSD-63/2015. Promovente: Aarón Jiménez Paz. Partes señaladas: Partido de la Revolución Democrática y otra. Disponible en <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SRE/2015/PSD/SRE-PSD-00063-2015-Acuerdo1.htm> (consultada el 28 de abril de 2016).

- Ángeles Cerón, Esteban. 2018. “El debate político y el voto programático para un buen gobierno”.
- Ávila, Rodrigo. 2014. “Sufragio efectivo, sí reelección”. *Letras Libres*, febrero. Disponible en <http://www.letraslibres.com/mexico-espana/sufragio-efectivo-si-reeleccion> (consultada el 7 de noviembre de 2016).
- Castellanos, Eduardo de Jesús. 2014. “El impacto de la reelección municipal inmediata, en la reforma constitucional de 2014, para el gobierno municipal y la democracia nacional”. *Revista Mexicana de Derecho Electoral* 6 (julio-diciembre): 73-102. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-electoral/article/view/10069/12097> (consultada el 7 de noviembre de 2016).
- Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral de 10 de febrero de 2014. Disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014 (consultada el 28 de abril de 2016).
- Diccionario Electoral. 2003. México: Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Centro de Asesoría y Promoción Electoral/ Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación/ Instituto Federal Electoral.
- Gilas, Karolina M. y Alma Verónica Méndez Pacheco. 2016. La reelección legislativa en México: la ilusión del poder ciudadano. En *Foro La Reección*, coords. Carlos Salvador Rodríguez Camarena y Humberto Urquiza Martínez, 69-77. México: Instituto Electoral de Michoacán/Tribunal Electoral del Estado de Michoacán/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
- Opinión SUP-OP-5/2014. Acción de inconstitucionalidad: 32/2014 y su acumulada 33/2014. Promoventes: Partido de la Revolución Democrática y Partido Movimiento Ciudadano. Demandados: Congreso del Estado de Colima y otro. Disponible en <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2014/OP/SUP-OP-00005-2014.htm> (consultada el 28 de abril de 2016).

- ____ SUP-OP-48/2014. Acción de inconstitucionalidad: 72/2014. Promovente: Partido de la Revolución Democrática. Demandados: Congreso del Estado de Hidalgo y otra. Disponible en <https://www.scjn.gob.mx/PLENO/OPTEPJFDocs/72-2014.PDF> (consultada el 28 de abril de 2016).
- ____ SUP-OP-30/2015. Acción de inconstitucionalidad: 126/2015 y su acumulada 127/2015. Promoventes: MORENA y Partido Acción Nacional. Órgano legislativo que emitió la norma impugnada: Congreso del Estado de Quintana Roo. Disponible en <https://www.scjn.gob.mx/PLENO/OPTEPJFDocs/Opini%C3%B3n%20AI%20126-2015.PDF> (consultada el 28 de abril de 2016).
- Reynoso Angulo, Víctor. 2012. *Representación legislativa y rendición de cuentas. Dilemas, riesgos y malentendidos*. No. 11 de Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- Roldán Xopa, José. 2013. *Caso reelección en el municipio de Tulum, Quintana Roo*. No. 17 de la Serie Comentarios a las Sentencias del Tribunal Electoral. Vertiente Salas Regionales. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- Salazar-Elena, Rodrigo. 2014. La reelección legislativa en México: ¿qué efecto esperar? México: FLACSO. Disponible en <http://blog.flacso.edu.mx/rodrigo-salazar/2014/09/05/reeleccion-legislativa/> (consultada el 7 de noviembre de 2016).
- SENADO. Senado de la República. LXXII Legislatura. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reformas del Estado, de Estudios Legislativos, primera y de Estudios Legislativos, segunda, en relación con las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral. Disponible en http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/docs/dictamen_031213.pdf (consultada el 28 de abril de 2016).
- Sentencia SX-JDC-81/2014. Actor: Hortencia Hernández Vásquez. Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca. Disponible en <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SX/2014/JDC/SX-JDC-00081-2014.htm> (consultada el 28 de abril de 2016).

- ____ SDF-JDC-203/2014. Actor: Martín Martínez Agustín, en representación de la planilla “Compromiso por Zoyamazalco”. Autoridad responsable: Comisión Municipal de Procesos Electorales de Coyotepec, Puebla. Disponible en <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SDF/2014/JDC/SDF-JDC-00203-2014.htm> (consultada el 28 de abril de 2016).
- ____ SER-PSC-5/2014. Promovente: Partido de la Revolución Democrática y otros. Parte denunciada: Partido Verde Ecologista de México y otros. Disponible en <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SRE/2014/PSC/SRE-PSC-00005-2014.htm> (consultada el 28 de abril de 2016).
- ____ SUP-REP-63/2015. Recurrente: Partido Revolucionario Institucional. Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Disponible en <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-00063-2015.htm> (consultada el 28 de abril de 2016).
- ____ SM-JDC-325/2015. Actor: Javier Alejandro Molina Trujillo. Responsable: Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Disponible en <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JDC/SM-JDC-00325-2015.htm> (consultada el 28 de abril de 2016).
- ____ SX-JDC-234/2015. Actor: Partido Verde Ecologista de México. Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Disponible en <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SX/2015/JRC/SX-JRC-00234-2015.htm> (consultada el 28 de abril de 2016).
- Trujillo García, Carlos Holmes y José Renan Trujillo García. 1994. “El voto programático, el nuevo poder del ciudadano”. Oveja negra.
- Ugalde, Luis Carlos y Gustavo Rivera Loret de Mola. 2014. “La reelección en México: antecedentes y retos de la reforma electoral de 2013”. *Revista Mexicana de Derecho Electoral* 6 (julio-diciembre): 189-210. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-electoral/article/view/10075/12103> (consultada el 7 de noviembre de 2016).